



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

Penal/Int.

Visto, en Acuerdo de la Sala "B" integrada, el expediente n° FRO 18224/2016/2/CA1, caratulado "Legajo de apelación en autos S [REDACTED] S.A. -G [REDACTED], Miriam Beatriz - P [REDACTED], Cristian Simón y otros por Infracción art. 303" (del Juzgado Federal n° 2 de San Nicolás), del que resulta que:

Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Dr. Rodolfo Alberto M [REDACTED] por la defensa técnica de Cristian Simón P [REDACTED]; el Dr. Ramiro Juan L [REDACTED] por Miriam Beatriz G [REDACTED] y el Dr. Lucas Ignacio W [REDACTED] por la defensa de Alfredo Patricio S [REDACTED], contra la resolución del 25 de noviembre de 2022 que dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Cristian Simón P [REDACTED] y Miriam Beatriz G [REDACTED] como responsables "prima facie" del delito de lavado de activos reprimido por el art. 303 inc. 1) del C.P. en calidad de autores; el procesamiento sin prisión preventiva de Alfredo Patricio S [REDACTED] como responsable "prima facie" del delito de lavado de activos reprimido por el art. 303 inc. 1) del C.P. en calidad de partícipe necesario (art. 45 del C.P.); y ordenó trabar embargo sobre los bienes de Cristian P [REDACTED] y Miriam G [REDACTED] hasta cubrir la suma de \$5.000.000.- y respecto de Alfredo S [REDACTED] \$2.500.000.-

Elevados los autos, se dispuso la intervención de la Sala "B" y se celebró audiencia oral en los términos del art. 454 del C.P.P.N., se agregaron las minutas presentadas digitalmente por el Fiscal General interino, Dr. Oscar A [REDACTED], por el Dr. L [REDACTED] por G [REDACTED] y por el Dr. W [REDACTED] por la defensa técnica de S [REDACTED], se labró el acta correspondiente y quedó la presente causa en condiciones de ser resuelta.

La Dra. Elida Vidal dijo:

1°) En primer lugar, corresponde indicar que conforme surge del acta labrada, siendo el día señalado para la audiencia fijada en autos, transcurrida media hora del horario establecido para su realización, el Dr. Rodolfo M [REDACTED], abogado defensor de Cristian Simón P [REDACTED] no realizó presentación alguna en relación a la apelación oportunamente deducida no



obstante estar debidamente notificado tanto de la radicación de este legajo ante esta Sala como de la audiencia fijada, consecuentemente, se impone hacer aplicación de lo dispuesto en el art. 454, segundo párrafo, CPPN (ley 26.374), y tenerlo por desistido del recurso interpuesto contra la resolución del 25/11/2022, en razón de su incomparecencia a la audiencia designada.

2°) Al motivar el recurso, la defensa técnica de Miriam Beatriz G[REDACTED] sostuvo que el auto de procesamiento dictado resulta a todas luces arbitrario, infundado y basado en pruebas inválidamente adquiridas.

Señaló que el juez a quo para decidir no valoró las pruebas aportadas por su parte ni consideró las argumentaciones expuestas al momento de oponerse al requerimiento fiscal, lo que importa una violación lisa y llana de derechos y garantías constitucionales.

Explicó que ninguna de las explotaciones agrícolas señaladas por el fiscal se correspondía con el campo adquirido por P[REDACTED], aclarando que: a) el Campo "Los C[REDACTED]" -identificado catastralmente como Circunscripción XI, Parcela 1410 A- fue adquirido por su marido Pedro Germinal B[REDACTED] por compra a Germinal Pedro B[REDACTED] y a Alberto Omar B[REDACTED] (Escritura n° 1, 2/1/2003 y Escritura n° 4, 4/1/2009, Escribano Guillermo Horacio Godoy) y posteriormente donado a su hija María Belén B[REDACTED] (Escritura n°200, 9/9/2011, Escribano Alfredo S[REDACTED]); b) el Campo "Manantiales" -identificado catastralmente como Circunscripción VII, Parcela 705, Partida [REDACTED] Circ. VII, Parcela 706, Partida 2.818; Circ. VI, Parc. 722, Partida [REDACTED] Circ. VII, Parc. 701 A, Partida 1.382; Circ. VII, Parc. 721, Partida [REDACTED] fracciones adquiridas por su marido a Germinal Pedro B[REDACTED] (Escritura n° 256, 4/11/2010, Escribano Alfredo S[REDACTED]) y posteriormente donadas a su hijo Ignacio Tomás B[REDACTED] (Escritura n° 58, 19/3/2012, Escribano Alfredo S[REDACTED]); y c) se corresponde al campo que le fue donado por Aurora P[REDACTED] y que luego del fallecimiento de Pedro B[REDACTED] fue explotado por su hijo Ignacio B[REDACTED].





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

También refirió que la inscripción de G [REDACTED] en la actividad de “arrendamiento, servicios inmobiliarios realizado por cuenta propia, inmuebles rurales propios o arrendados” obedeció al arrendamiento de un campo heredado de su madre.

Expresó que el magistrado no señaló ningún elemento convictivo que pudiera dar cuenta del ilícito de lavado de dinero, sino que solamente refirió sospechas, indicios o conjeturas que no tienen ningún asidero válido o efectuó remisiones a la causa seguida ante la justicia provincial.

Sostuvo que el juez en la decisión atacada se remitió en todo momento al delito precedente, sin agregar ninguna otra circunstancia o prueba que permita acreditar el delito previsto en el art. 303 del C.P., por lo que estaríamos en presencia de un doble juzgamiento penal afectando el derecho constitucional de “no bis in idem” de su asistida.

Argumentó que su defendida nunca administró el campo adquirido por P [REDACTED] y señaló documental aportada en su defensa; que G [REDACTED] no intervino en la venta del departamento de Pilar, como así tampoco utilizó el poder extendido a su favor por la Sra. P [REDACTED]; y con respecto a la fracción de campo donada, expuso que no hizo movimientos de activos por cuanto fue beneficiada por una donación dos años antes del fallecimiento de P [REDACTED] y su administración no puede ser objeto de investigación por haberse arribado a un acuerdo en la justicia provincial.

Solicitó que se revocara la resolución apelada y formuló reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Al momento de mejorar sus fundamentos reiteró los expuestos en su escrito recursivo y agregó que los únicos actos en los que tuvo intervención su defendida fueron la oferta de donación y su aceptación ocurridos el 2/9/2010 y 23/12/2010 respectivamente, es decir previos a la sanción de la ley 26.683 (21/6/2011), por lo que esa única conducta debe ser analizada bajo las prescripciones del art. 278 del CP, resultando atípica, por aplicación del principio de ley penal más benigna.



3°) Por su parte, el Dr. Lucas W■■■■ -defensor de Alfredo Patricio S■■■■-, sostuvo que la resolución recurrida resulta nula por arbitraria, incongruente y contraria a derecho y a las constancias de la causa.

Señaló que el juez ha efectuado meras afirmaciones dogmáticas -sin ningún respaldo lógico- respecto de la infracción atribuida a su defendido.

Destacó que en la causa IPP 12-00005139-12 caratulada “B■■■■ Pedro Germinal y otros s/ Circunvencción de Incapaz y Falsedad Ideológica -Víctima-Dte: E■■■■ Pablo” que tramitó ante la justicia ordinaria, el juzgador no se expidió en relación a la culpabilidad de Alfredo S■■■■, sino que fue sobreseído por aplicación del criterio de oportunidad procesal, siendo esta imputación ante el fuero federal una clara violación a derechos y garantías constitucionales (doble juzgamiento- persecución penal).

Asimismo, resaltó la ausencia probatoria respecto de los elementos objetivos y subjetivos tipificantes del delito atribuido a su defendido, señalando que existe sobrada evidencia acerca de una conducta plenamente ajustada a derecho por parte del Escribano S■■■■, por lo que solicitó que la resolución impugnada sea revocada y se dicte el sobreseimiento de su asistido de conformidad con lo dispuesto por el art. 336 inc. 2 y 4 del CPPN.

Finalmente criticó el embargo impuesto por excesivo y propuso estimarlo en \$1.000.000.-

Al mejorar los fundamentos reiteró los expuestos al recurrir.

4°) En oportunidad de celebrarse la audiencia prevista en el art. 454 del CPPN, el Fiscal General interino Dr. Oscar A■■■■, señaló que contrariamente a lo sostenido por los apelantes, el juez expuso las razones de hecho y de derecho suficientes para dictar el procesamiento de G■■■■, P■■■■ y S■■■■, no observándose errores o fisuras en el iter lógico jurídico de los fundamentos brindados, por lo que corresponde el rechazo de los agravios expuestos en tal sentido.

Expresó que se logró demostrar la incompatibilidad de los perfiles patrimoniales de los imputados con los movimientos de los fondos realizados, se advirtió la utilización de contratos de mutuo para la justificación





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

del origen de fondos no declarados o ilícitos por parte de S[REDACTED] S.A. al comprar el campo de Pergamino, y la utilización de dinero en efectivo, lo que dificulta o impide la trazabilidad y control debido de los movimientos de activos, entendiendo que estas pruebas reunidas resultan suficientes para solventar con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal la conducta atribuida a cada uno de los imputados.

Destacó que la resolución recurrida desarrolló las maniobras realizadas en perjuicio de P[REDACTED], aprovechándose de su trastorno cognitivo, lo que permitió acrecentar de manera ilícita su patrimonio y la puesta en circulación en el mercado de bienes inmuebles, que en el caso de G[REDACTED], fue mediante la administración de 150 hectáreas parte de la Estancia La Dolores, ubicada en las inmediaciones de la localidad de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, a partir del 21/6/21; y la administración del campo ubicado en Estación Pujol del partido de Pergamino y su venta a P[REDACTED] en calidad de presidente de S[REDACTED] S.A.; como así también describió que S[REDACTED] prestó la colaboración necesaria para la puesta en circulación de bienes de origen ilícito, actuando en calidad de escribano en todas las transmisiones inmobiliarias cuestionadas, por lo que en ese entendimiento, resulta correcto el encuadramiento de los hechos en la figura típica efectuada por el juez y la participación de los procesados en las maniobras endilgadas.

En relación al planteo de vulneración del principio non bis in idem, expresó que no se encuentra la afectación alegada, ya que en la causa "B[REDACTED] Pedro Germinal y otros s/ Circunvención de Incapaz y Falsedad Ideológica- Víctima-Dte. E[REDACTED] Pablo", en trámite ante la Unidad Funcional de instrucción y Juicio n° 6 del Departamento Judicial de Pergamino se investigan las maniobras defraudatorias en perjuicio de María Autora P[REDACTED], y en este fuero se los procesó por el blanqueo de activos provenientes de aquellas estafas, por lo que no existe identidad del objeto de la persecución penal.

Efectuó reserva de recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal y de interponer extraordinario federal, y solicitó que se confirme la resolución apelada.



5º) Primeramente, cabe dar tratamiento a la aludida falta de motivación de la resolución traída en apelación formulada por la defensa de ambos imputados, en los términos del art. 123 del CPPN, en tanto expusieron que no se encuentran acreditados los extremos de la imputación efectuada a sus defendidos y acusaron orfandad probatoria e inadecuada valoración de la prueba colectada.

Es menester reseñar –como reiteradamente se ha sostenido por esta Sala- que la declaración de nulidad de un acto procesal presupone, de acuerdo con la interpretación restrictiva que rige en la materia y los alcances de los principios de conservación y trascendencia, la acreditación de un perjuicio real y concreto respecto del orden del proceso y de las garantías que son su causa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido al respecto, entendiendo que: “(...) en materia de nulidades debe primar un criterio de interpretación restrictivo y sólo cabe pronunciarse por la anulación de las actuaciones cuando exista un derecho o interés legítimo lesionado, de modo que cause un perjuicio irreparable (...) Su procedencia exige, como presupuesto, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción aparecería respondiendo a un formulismo vacío, que va en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público” (Fallos 323:929).

Por ende, para analizar adecuadamente este planteo debe tenerse en cuenta que la declaración de nulidad de un acto consiste en privarle de eficacia como consecuencia de hallarse impedido de producir los efectos previstos por la ley, al alojar en alguno de sus elementos un vicio que lo desnaturaliza. “La nulidad se vincula íntimamente con la idea de defensa (art. 18 C.N.). Sólo cuando surge algún vicio, defecto u omisión que haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía en cuestión se produce una indefensión configurativa de nulidad...” (Francisco D’Albora, “Código Procesal Penal de la Nación”, Edit. Abeledo Perrot, octubre de 1999, pág. 258).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

Por lo tanto, no todo defecto o irregularidad genera invalidez, dependiendo de la cuantía de la afectación o intensidad del menoscabo, exigiéndose un perjuicio considerable que supere la mera irregularidad.

De la lectura del fallo en crisis, se aprecia que el juez a-quo ha fundado profusa y adecuadamente la decisión recurrida, expresando allí las razones por las cuáles, en su criterio, correspondía dictar el procesamiento de los encartados como autores de los hechos que se les atribuyeron, señalando expresamente las pruebas en las que basó su fundamento, por lo que el auto se encuentra motivado con el razonamiento seguido por el juez, para dar sostén a la decisión a la que arriba con independencia de su acierto o error, lo que se revisará por el presente. Por tal razón dicho agravio debe desestimarse.

6º) A fin de resolver, es conveniente reseñar que la presente causa se inició el 21/4/2016 a raíz de la remisión efectuada por la Dra. Patricia Fernández -titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio n° 6 del Departamento Judicial de Pergamino-, de las actuaciones correspondientes a la causa "B[REDACTED] Pedro Germinal y otros s/ Circunvención de Incapaz y Falsedad Ideológica- Víctima-Dte.: E[REDACTED] Pablo", IPP n° [REDACTED] al Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, donde se investigó el desapoderamiento de los bienes que en vida poseyera Aurora P[REDACTED] de Hearne, con intervención de Pedro B[REDACTED], su esposa Miriam Beatriz G[REDACTED], el escribano Alfredo Patricio S[REDACTED], Cristian Simón P[REDACTED] -Presidente de S[REDACTED] SA-, y otros; por entender que, de la investigación allí realizada, se desprendían maniobras que podían encuadrar en la posible comisión de delitos contra el orden económico y financiero (art. 303 y ss del CP) y contra el Régimen Penal Tributario, destacando que la persona jurídica S[REDACTED] SA habría erogado abultadas sumas de dinero para adquirir un departamento y una propiedad rural, cuya procedencia lícita no pudo acreditarse, sustentándose en la pericia obrante a fs. 24/25 que dictaminó que esa sociedad no se encontraba en condiciones financieras de afrontar las operaciones inmobiliarias denunciadas.

Así, en las actuaciones remitidas, más precisamente en el requerimiento de elevación a juicio, se describieron los hechos objeto de



aquella investigación consistentes en: HECHO N° 1: Pedro Germinal B[REDACTED] y Mirian Beatriz G[REDACTED], abusando de las necesidades de María Aurora P[REDACTED], en tanto ella padecía un trastorno cognitivo de larga data que afectaba su capacidad judicativa, dolencia que era evidente y conocida por los prenombrados de antemano, la cual le impedía comprender la trascendencia y consecuencia de los actos jurídicos que realizaba, hicieron suscribir a P[REDACTED] una escritura de donación con reserva de usufructo, en favor de los encausados, respecto de una porción de campo de ciento cincuenta hectáreas, sito en la localidad de Arrecifes Bs. As. mediante escritura pública de fecha 2 de septiembre del año 2010, celebrada ante Alfredo Patricio S[REDACTED], escribano titular del Registro de Contratos Públicos N°8 de Pergamino. Para ejecutar dicha maniobra habrían contado con la participación necesaria del notario, por cuanto éste estaba en pleno conocimiento de la voluntad bajo la que actuaba P[REDACTED]. Además B[REDACTED] y G[REDACTED] contaron con la participación secundaria de Héctor Delfín B[REDACTED], Gustavo Enrique F[REDACTED] y Eduardo Alberto P[REDACTED], quienes oficiaron de testigos de la escritura, en el afán de dar solemnidad al acto.

HECHO N° 2: Pedro Germinal B[REDACTED] y Miriam Beatriz G[REDACTED] hicieron suscribir a la nombrada en ocasión en que se encontraba internada en la Clínica Pergamino de esta ciudad, un poder general de administración y disposición, en su favor, en fecha 4 de abril del año 2012, celebrado ante el Dr. Alfredo Patricio S[REDACTED]. A tales fines contaron, no solo con la complicidad del referido notario, sino también con la de Gustavo Enrique F[REDACTED], **Cristian Simón P[REDACTED]** y Marcelo Daniel Alberto A[REDACTED], quienes oficiaron de testigos de tal escritura, en el afán de dar solemnidad al acto. Posteriormente, B[REDACTED] y G[REDACTED] se valieron de dicho instrumento, para disponer de un bien inmueble que P[REDACTED] poseía en la localidad de Pilar. En efecto, el 1 de agosto del año 2012 se instrumentó la venta de la unidad funcional doscientos treinta, cincuenta y cuatro y la unidad Complementaria S. sita en el dominio "Las Mercedes", de calle Champagnat N° [REDACTED] de la mencionada localidad, operación que se realizó por la supuesta suma de doscientos setenta mil pesos, cuyo monto sería irrazonable, dado que el precio





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

del mercado cuanto menos era cuatro veces superior. **El comprador de dicho inmueble resultó ser la firma S[REDACTED] S.A. representada por su presidente Cristian Simón P[REDACTED]**, la cual no poseía la capacidad económica de erogar el valor de compra declarado, P[REDACTED], además, resultó ser uno de los testigos de la escritura en la que se otorgó el poder general de administración y disposición de bienes supra detallado y que habilitó tal operación. Nuevamente, a fin de concretar la maniobra, los autores contaron con la complicidad del Escribano S[REDACTED].

HECHO N°3: con fecha 13 de abril del año 2012, en la ciudad de Pergamino, un día antes de que María Aurora P[REDACTED] fuera internada en el Geriátrico Santa Cecilia por Pedro Germinal B[REDACTED] y Miriam Beatriz G[REDACTED], los pre nombrados, abusando de tal condición de salud de aquella, le hicieron suscribir un contrato de arrendamiento por el cual, en su cláusula décimo tercera, otorgaba suficiente recibo y carta de pago, en favor de B[REDACTED], por los arrendamientos del campo que fuera de su propiedad (detallado en hecho N°1) correspondientes a los ciclos agrícolas 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, los cuales no habrían sido abonados, en tanto B[REDACTED] y G[REDACTED] ocasionalmente y de acuerdo a su entero arbitrio, entregaban dinero a P[REDACTED] para su subsistencia, circunstancia esta que acentuaba la dependencia de P[REDACTED] para con ellos. Como consecuencia de dicha maniobra B[REDACTED], según consta en la instrucción de la causa provincial, habría dejado de abonar tres alquileres cercanos al medio millón de pesos cada uno.

Recibidas, se remitieron al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás, delegándose la instrucción en los términos del art. 196 del CPPN.

El Fiscal Federal interviniente solicitó informe a la AFIP, dispuso una serie de medidas, requirió informe patrimonial de los imputados a distintas reparticiones y pidió colaboración a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) a los fines de avanzar con el esclarecimiento de las maniobras descriptas.



7º) En primer lugar, resulta preciso recordar que el delito tipificado en el art. 303 inciso 1º del Código Penal dispone que: “Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil (\$300.000.-), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí...”.

Así, tal como lo entiende la doctrina, el lavado de activos es “... *el conjunto de operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva son incorporados e integrados al sistema económico legal institucionalizado, confiriéndoles apariencia legítima.*” (Omar Breglia Arias y Omar R. Gauna, “Código Penal y Leyes complementarias”, Astrea, 2001, tomo II).

Sujeto activo de este delito, puede ser cualquier persona, ello en virtud de que la ley no exige ninguna cualidad en este sentido.

Es sabido que el lavado de activos puede ser una o un conjunto de operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza ilícita son incorporados e integrados al sistema económico legal, con apariencia legítima. Esta incorporación demanda un accionar complejo, destinado a introducir de manera disimulada (por ejemplo a través de prestanombres y testaferros que ayudan a ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes para eludir las consecuencias jurídicas de esas acciones) bienes o valores de origen espurio.

Respecto a las acciones típicas enumeradas en la norma se ha dicho que existe consenso en cuanto al significado de los verbos típicos, y así: a) convertir es transformar, la acción supone el cambio de un bien obtenido de la comisión de un delito por otro de naturaleza distinta; b) transferir significa ceder un bien a un tercero a cualquier título, comprendiendo la transferencia de la cosa tanto su transmisión a terceras personas como su





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

traslado de un lugar a otro; c) administrar hace referencia a tener el gobierno y la dirección del dinero o de los bienes obtenidos ilícitamente, abarcando tanto el cuidado como el manejo de estos objetos; d) vender es transmitir a otro un bien a título oneroso; e) grava un bien quien constituye sobre él un derecho real de garantía (por ejemplo prenda o hipoteca); f) disimular consiste en disfrazar u ocultar algo, para que parezca distinto de lo que es. (Reggiani Carlos, “Lavado de activos”, Revista Pensamiento Penal, 15/11/2013, <http://www.pensamientopenal.com.ar/autores/carlos-reggiani>).

El objeto material del delito lo constituyen los bienes provenientes de un ilícito penal, pudiendo ser éstos de cualquier tipo, y objeto material a su vez del delito precedente o bien derivados de éste. (ver Acuerdo del 14 de octubre de 2022 en el expediente FRO 48363/2017/21/CA8 de entrada, caratulado “Legajo de apelación en autos GONZALEZ, Emanuel Maximiliano- FRANCO, Graciela Cristina- PAZ, Mercedes Alejandra y otros por Infracción art. 303- infracción Ley 23.737”)

Ahora bien, el tipo subjetivo propio del delito atribuido a los imputados, requiere que el autor del delito de lavado tenga al menos dolo eventual.

Como señalan Omar Breglia Arias y Omar R. Gauna, “si bien el autor debe conocer que los bienes provienen de un ilícito, y que su acción puede conferirles apariencia de legitimidad, la figura penal no exige que quien lleva a cabo la acción tendiente a legitimar el activo tenga un conocimiento preciso del delito previo, ni tampoco que se proponga ocultar o disimular la procedencia ilícita de los bienes, sino que su conducta sea potencialmente apta para ello, y que el autor lo sepa. Se puede incurrir en este delito, entonces, con dolo eventual” (véase autores citados en “Código Penal y leyes complementarias Comentado, Anotado y Concordado, pág 751, 5º edición actualizada y ampliada, Editorial Astrea).

En igual sentido ha dicho la Sala II de la CN Fed. Crim. y Corr que “...la procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo sólo requiere la comprobación genérica de una actividad delictiva que, según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, sin



que sea necesaria la demostración plena de un acto delictivo específico ni de los concretos partícipes en el mismo (ver fallo del Tribunal citado del 14/7/11 en autos “Bellone, Ana Elizabeth s/ Procesamiento”, LL, 2011-E-250). (ver voto de la suscripta en Acuerdo del 29 de diciembre de 2015 en el expediente N° FRO 1904/2013/16/CA10, caratulado “Legajo de Apelación en autos ROSSINI, Mario José Enrique; ITURRIOZ, Antonio; PERROTA, Leonardo y Otros por Defraudación por Administración Fraudulenta”).

8º) Dicho esto, corresponde analizar las pruebas colectadas en autos y la participación de los imputados y si en el caso se verifican los requisitos del tipo objetivo y subjetivo de la figura penal endilgada.

En relación a Miriam Beatriz G[REDACTED], en oportunidad de prestar declaración indagatoria se le imputó: “haber puesto en circulación en el mercado activos de origen ilícito, mediante la administración de un inmueble rural de 150 hectáreas, parte de la Estancia La Dolores, ubicado en las inmediaciones de la localidad de Arrecifes, Provincia de Buenos Aires (nom. Cat. C:IV, p; 179, partida N° [REDACTED] Matrícula 5192), a partir del 21/6/21. El inmueble habría sido adquirido ilícitamente el 2/9/2010, a raíz de una donación efectuada por Aurora P[REDACTED] en beneficio de Pedro B[REDACTED] y Miriam G[REDACTED], mediante una escritura pública, que B[REDACTED] y G[REDACTED] habrían hecho suscribir a P[REDACTED], ante el escribano Alfredo S[REDACTED] (Reg. N° 8, Pergamino), en perjuicio de Pablo E[REDACTED], único y universal heredero de los bienes de P[REDACTED] según disposición testamentaria de ésta con fecha 15/6/2007. Asimismo haber puesto en circulación activos ilícitos mediante la administración del campo ubicado en las inmediaciones de la Estación Pujol del partido de Pergamino desde la venta del mismo oportunamente, a Cristian Simón P[REDACTED] en calidad de presidente de S[REDACTED] S.A.”.

En ese momento la imputada declaró que Aurora P[REDACTED] les había hecho una donación en vida con reserva de usufructo del campo ubicado en Arrecifes y que cuando P[REDACTED] falleció, ella y su esposo pasaron a ser los dueños y administradores absolutos del campo. Añadió que previamente a la donación, su esposo -Pedro B[REDACTED]- trabajaba en el campo, arrendándolo a P[REDACTED], quien falleció en octubre de 2012. Preguntada si





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

conocía al escribano S[REDACTED], respondió que lo conoció en el momento del acto de donación y que desconocía por qué habían recurrido a él, que probablemente era conocido de su marido. También se le preguntó sobre su relación con Cristian Simón P[REDACTED], a lo que respondió que sí lo conocía por haber sido amigo de su esposo.

Luego, amplió su descargo por escrito, formulando una serie de aclaraciones y aportando documentación para acreditar los extremos alegados.

En su defensa, describió con mayores detalles el vínculo que tuvo con P[REDACTED] y explicó que era su marido quien se encargaba de la explotación agrícola del campo de Arrecifes y quien había suscripto la totalidad de los contratos de arrendamiento.

También expresó que en mayo del año 2010 se inscribió en AFIP en el rubro “locación de servicios”, y luego en mayo de 2013 lo modificó a “arrendamiento, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, inmuebles rurales propios o arrendados”, con motivo del arrendamiento del campo heredado de su madre, siendo los arrendatarios Ricardo Alberto B[REDACTED] y Norberto Raúl G[REDACTED], y agregó que recién para la campaña 2022/2023 dichas fracciones fueron arrendadas a su hijo Ignacio B[REDACTED].

Analizados los elementos de prueba obrantes en la causa y confrontados con lo desarrollado en el considerando precedente, entiendo que le asiste razón al apelante y si bien Mirian G[REDACTED] estuvo involucrada en un proceso penal que tramitó ante la justicia ordinaria en autos “Circunvención de incapaces (art. 174 inc. 2° del CP) – Falsedad ideológica” PP n° [REDACTED] 9-12, que acreditaría su intervención en un ilícito precedente conforme lo requiere la figura de lavado de activos, en mi criterio, con los elementos con los que se cuenta, no se encuentra corroborado que hubiera realizado las maniobras típicas del delito reprimido en el art. 303 del CP de puesta en circulación de activos mediante la administración del campo de Arrecifes como se le atribuyó, ya que se observa que los contratos de arrendamiento respecto de esta fracción de campo obrantes en autos fueron suscriptos por Aurora P[REDACTED] (como arrendadora) y Pedro B[REDACTED] (como arrendatario), no



señalándose por parte del fiscal interviniente ningún elemento que permita inferir la participación de esta imputada en ese sentido.

Lo mismo se advierte respecto del campo de Pergamino, ya que los elementos aportados por G[REDACTED] al efectuar su descargo por escrito, a priori, desvirtuarían la teoría elaborada por el Fiscal, quien teniendo como sustento lo informado por SENASA a fs. 187/194, entendió que G[REDACTED] habría administrado y consecuentemente aprovechado las ganancias de la explotación económica de esas hectáreas a partir de su adquisición por parte de P[REDACTED] en representación de S[REDACTED] SA, ello sin perjuicio de que se profundice la investigación a su respecto.

Examinadas las constancias acompañadas por G[REDACTED], se observa que las copias de los contratos de arrendamiento accidental celebrados con Norberto G[REDACTED] y Ricardo B[REDACTED] se corresponden a fracciones de campo ubicadas en la Jurisdicción de Cuartel Catorce, Partido de Pergamino, -que de acuerdo a las copias de las matrículas agregadas, le pertenecen a G[REDACTED] en partes indivisas-, cuyas nomenclaturas catastrales (Circ.: XIV, [REDACTED] y Circ.: XIV, Parcela 1784 f.) son diferentes de la del campo adquirido por Cristian P[REDACTED] (Circ.: X, Parcela 290 a.), a la vez que de acuerdo a lo informado por SENASA a pedido de la Fiscalía, Mirian Beatriz G[REDACTED] no poseía unidades productivas a su nombre.

Asimismo, corresponde destacar que la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (fs. 1004/1012) a pedido del Fiscal interviniente en la causa, elaboró un informe de colaboración a fin de esclarecer si las personas investigadas contaban con capacidad financiera suficiente para llevar a cabo las operaciones cuestionadas en el que analizó toda la documentación recabada a lo largo de la instrucción, no habiendo emitido dictamen respecto de los contratos de arrendamiento suscriptos por P[REDACTED]/ B[REDACTED]-G[REDACTED] sobre el inmueble rural de Arrecifes por no haberlos tenido a la vista.

Por otra parte, si bien la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, en virtud de la colaboración solicitada, envió





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

un proyecto de solicitud de indagatoria, sugirió una serie de medidas de prueba tendientes a profundizar la investigación de los hechos (fs. 1026/1030), ante lo cual el Ministerio Público Fiscal proveyó que promovería la formación de un legajo de investigación por separado por entender que aquellas se encontraban direccionadas a profundizar la posible intervención que podrían haber tenido los familiares de los sujetos pesquisados. (fs.1051)

En ese contexto observo que en la resolución atacada tampoco se ha señalado qué elementos puntuales fueron valorados como indicadores del delito de lavado de activos, por lo que por el momento, en mi opinión, no se cuenta con prueba suficiente para dar sostén al juicio de probabilidad que se requiere para dictar un auto de procesamiento de esta encartada.

Consecuentemente, atento la existencia de dudas, entendidas “como la indecisión del intelecto puesto a elegir entre la existencia y la inexistencia del objeto sobre el cual se está pensando, derivada del equilibrio entre los elementos que inducen a afirmarla y los elementos que inducen a negarla, todos ellos igualmente atendibles” (Cafferata Nores, José I., “La prueba en el Proceso Penal”, Depalma, 3ª ed., Buenos Aires, 1998, p. 8 y 11), propongo revocar la resolución recurrida, en cuanto procesó a Mirian G. [REDACTED] en calidad de autora responsable del delito de lavado de activos reprimido en el art. 303 1º) del CP.

Ello, no obsta a que con el devenir del proceso y con otros elementos que puedan incorporarse a la causa, tales dudas puedan disiparse posibilitando así el arribo al sobreseimiento de esta encartada o a su procesamiento.

Debe recordarse, como lo ha señalado este Tribunal en anteriores ocasiones, que la doctrina tiene dicho respecto del dictado de la falta de mérito del art. 309 del CPPN que “Profundizar la investigación es la base de su procedencia [CCCF, Sala I, DJ, 2001-2-362, sum. 2093], tanto para verificar la realidad del hecho por el que fue oído el imputado como para probar su participación en él y, en tal caso, a los efectos de confirmar, si fuere el caso, causas de justificación o de inculpabilidad. Se trata de resolver un



cuadro de prueba insuficiente, entonces, para procesarlo o sobreseerlo por virtud de la prueba pendiente de producción ...” (Guillermo R. Navarro y Roberto R. Daray, “Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, 2º edición, Hammurabi – José Luis Depalma editor, tomo II, pág. 906).

9º) En el caso de Alfredo S[REDACTED], en oportunidad de su indagatoria se le atribuyó: “haber prestado una colaboración necesaria para la puesta en circulación de bienes de origen ilícito en el mercado, al actuar en calidad y función de escribano oficiante en las transmisiones inmobiliarias correspondientes * Venta de fracción de campo en fecha 16/10/2012 de 110 hectáreas, 50 áreas y 11 centiáreas, ubicado en las inmediaciones de la Estación Pujol del partido de Pergamino, pcia. de Buenos Aires, identificado como matrícula N° [REDACTED] NOMECLATURA CATASTRAL C. x P.209A); dicha adquisición fue efectuada por Cristian Simón P[REDACTED] (en calidad de presidente de S[REDACTED] S.A.), a la parte vendedora integrada por Zulema Haydee B[REDACTED], Mabel Graciela B[REDACTED] y Adolfo B[REDACTED], (este último representado por Pedro Germinal B[REDACTED], esposo de Miriam Beatriz G[REDACTED]); realizada ante su intervención en calidad de escribano; -*Venta de bien inmueble en Pilar el día 1 de agosto del año 2012, unidad funcional doscientos treinta, cincuenta y cuatro y la unidad complementaria S, sita en condominio “Las Mercedes” de calle [REDACTED] cuyo comprador resultó ser la firma S[REDACTED] S.A. representada por su presidente Cristian Simón P[REDACTED], realizada ante su intervención en su calidad de Escribano. -* donación de P[REDACTED] a B[REDACTED] y G[REDACTED] de inmueble rural, -parte de la estancia La Dolores-, ubicado en inmediaciones de la localidad de Arrecifes Pcia. de Buenos aires., el cual fue adquirido ilícitamente el 2/09/2010 a raíz de donación efectuada por aurora P[REDACTED] en beneficio de Pedro B[REDACTED] y Miriam G[REDACTED], mediante una escritura pública que B[REDACTED] y G[REDACTED] habrían hecho suscribir a P[REDACTED], ante su presencia en calidad de escribano, en perjuicio de Pablo E[REDACTED], único y universal heredero de los bienes de P[REDACTED] según disposición testamentaria de ésta de fecha 15/06/2007”, en ese momento se abstuvo de declarar.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

Posteriormente, realizó un descargo por escrito, en el que negó totalmente los hechos atribuidos, brindó explicaciones sobre los actos en los cuales intervino en calidad de escribano público, especificando que realizó todas las averiguaciones exigidas por la ley y por la UIF, entre ellas, la certificación contable y certificados administrativos de estilo y certificados de anotaciones personales (en dónde debe figurar anotación de litis en caso de existir).

En referencia a la venta del campo ocurrida el 16/10/2016, describió que las hermanas Mabel y Zulema B [REDACTED] -clientas desde el año 2000 aproximadamente- concurren a su escribanía para solicitar su intervención en dicha operación, por lo que previo al acto solicitó los certificados administrativos y registrales de estilo al efecto de acreditar la capacidad, legitimación y posibilidad de disponer del inmueble en cuestión y además requirió la certificación contable para la justificación de los fondos utilizados por el adquirente de esa operación, de la que no se advirtió ninguna anomalía.

En tal sentido destacó que su rol se limitó al requerimiento de la certificación contable, confeccionada en debida forma y suscripta por el profesional y visada por el Consejo de Ciencias Económicas en caso de corresponder, pero de ningún modo se exigía efectuar un análisis contable y/o financiero, propio de un auditor sobre la documentación aportada, por lo que resaltó que su actuación fue conforme a derecho y en el marco de legalidad. Asimismo refirió que mucha de la información que se cuestionó en estos autos fue aclarada previamente en los expedientes civiles n° 69359 "Incidente de revocación de testamento s/ S [REDACTED] -Juzgado Civil y Comercial n° 1 -Departamento Judicial de Pergamino- B [REDACTED] Ignacio Tomás y otros c/ E [REDACTED] Pablo s/ incidente (excepto los tipificados expresamente); "B [REDACTED] Ignacio Tomás y otros c/ E [REDACTED] Pablo s/ incidente (excepto los tipificados expresamente, Expediente n° [REDACTED] y "P [REDACTED] María Aurora s/ sucesión ab-intestato", Expediente n° [REDACTED], en los que manifestó que se dictó sobreseimiento.



Examinadas las actuaciones incorporadas a la causa, se advierten indicios serios que resultan suficientes para acreditar los extremos requeridos por la figura penal aquí endilgada y la responsabilidad de este imputado en la conducta que se le atribuyó, por lo que las explicaciones brindadas en oportunidad de efectuar su descargo sólo pueden valorarse como un intento de mejorar su situación procesal.

De la serie de evidencias que se analizaron en la IPP 12-00 -005139/12, cobraron relevante importancia y resultaron demostrativas de la intervención necesaria del escribano S[REDACTED] para trasladar y legitimar activos de origen ilícito, primeramente, el poder de administración y disposición de Bienes y la Medida de Autoprotección de personas otorgado el 4/4/2012 por Aurora P[REDACTED] a favor del matrimonio B[REDACTED]/Genero, mientras se encontraba internada en la Clínica Pergamino por un cuadro de neumonía, respecto de las Unidades funcionales n°230, 54 y la complementaria S, en el condominio “Las Mercedes” sito en la localidad de Pilar –por su colaboración en la planificación del desamparamiento de los bienes de P[REDACTED]-.

Conforme se observa en el testimonio brindado el 9/10/2015 por el enfermero de la Clínica Pergamino Rubén Darío A[REDACTED], Aurora P[REDACTED] ingresó el día 3 de abril de 2012 a las 23 horas con una insuficiencia respiratoria, lo que dedujo por los medicamentos que le suministraron por suero al ingreso. También declaró que al día siguiente, 4/4/2012, “le dieron “alopidol”, que es un psicofármaco primario que se utiliza para la sedación, de baja vida orgánica, que dura poco en el organismo. Se observa “triptanol” que es un anti depresivo y “dormicum”, un centímetro indovenoso, que es un depresor del sistema nervioso potente, que provoca que la persona se duerma a los pocos minutos de suministrarlo. Todo ello suministrado por intermedio de una guía de suero, lo que se dice en “bolo”. Continuó: “Respecto de las observaciones de enfermería, obrantes a fs. 159/160, se dejó constancia que el día 3 de abril la mujer estuvo sin acompañante en todo momento de esa jornada; luego el día 4 de abril se consignó que apareció la cuidadora.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

Respecto al día 5 se hizo constar que la paciente estuvo excitada, perdida en tiempo y espacio, para lo cual se avisó al médico quien indicó “halopidol”, lo que figura a fs. 157vta.” (fs.892/893 de la IPP 5139/2012)

Esta declaración pone de resalto la colaboración del escribano en las maniobras aquí investigadas ya que resulta improbable que pasara inadvertido por el notario que la capacidad psíquica de P [REDACTED] estaba alterada y que en ese momento le era imposible comprender plenamente la magnitud de los actos otorgados en su presencia, lo que controvierte que hubiera cumplido con los deberes y obligaciones de su profesión como lo argumentó.

Por otra parte, tampoco dejó a salvo su responsabilidad solicitando a los médicos tratantes un certificado de aptitud mental para otorgar determinados actos -como es de práctica habitual de los escribanos- lo que le hubiera permitido evitar futuros problemas, conforme refirió en su declaración el Dr. Oscar Levato, médico Psiquiatra responsable de la Clínica Privada de Salud Mental donde estuvo internada Aurora P [REDACTED] (desde el 19/5/2012 hasta su deceso el 1/10/2012). (fs. 777/782 de la IPP [REDACTED])

Posteriormente, su responsabilidad en los hechos atribuidos se manifiesta en la celebración de la escritura de transferencia de dicho departamento ubicado en Pilar, que fue adquirido por S [REDACTED] SA (sociedad que claramente no tenía capacidad económica para la compra) por la suma de **\$270.000.-** que se ha calificado de irrisoria, representada en ese acto por su Presidente Cristian P [REDACTED], quien casualmente resultó ser una de las tres personas que oficiaron de testigos en los instrumentos antes referenciados.

En relación al valor de transmisión de dicho inmueble, resulta preciso destacar el análisis que realizó el Fiscal Federal en su dictamen, donde refirió que ese departamento había sido adquirido por P [REDACTED] en el año 1999 por USD104.500, que de acuerdo a la cotización del dólar estadounidense (\$4,60.-) a la fecha de la operación (1/8/2012), se obtenía como valor de referencia la suma de **\$480.700.-**. A mayor abundamiento mencionó la pericia arquitectónica practicada durante la instrucción en la IPP [REDACTED] 2, (fs. 348) que había concluido que tal



unidad debió costar aproximadamente **\$1.100.000.-**, lo que resulta demostrativo de lo exiguo del precio pactado.

A su vez, respecto de la ausencia de capacidad patrimonial tanto de S[REDACTED] SA como de su representante Cristian P[REDACTED], resulta conveniente señalar que según el contenido del informe de la DAFI obrante a fs. 1004/1013 del expediente principal, realizado en base al Informe Final de Inspección de Afip (Orden de Intervención n[REDACTED]) se constataron un sin fin de irregularidades relativas a la sociedad: 1) presentó DDJJ en el año 2012 declarando ventas por apenas \$24.000.- sin constancias de que hubiera contraído deudas para concretar las operaciones observadas. Además declaró ganancias en cero durante los años 2013 y 2014 y no presentó la declaración jurada correspondiente a ese impuesto en el año 2015; 2) no era titular de bienes registrables, ni de cuentas bancarias, ni tenía servicio eléctrico activo o de gas en la provincia de Buenos Aires; y 3) poseía un domicilio fiscal inexistente. También se detectaron inconsistencias respecto de la autorización del Directorio social para llevar a cabo la compra (acta n°24) la cual no sólo carecía de firmas, sino que además figuraba que se había celebrado en la sede social que -como antes se refirió- era inexistente. En relación a la documentación de respaldo para acreditar adecuadamente el mutuo de P[REDACTED] a S[REDACTED] SA por \$640.000.- se observó que el contrato había sido celebrado por una única persona, Cristian P[REDACTED] -a título personal y en representación de la sociedad-; no se consignó plazo de devolución y se estableció sólo un interés anual de \$50.000.-, además de que no fue declarado en AFIP, por lo que se concluyó que tal préstamo fue simulado a los fines de completar la certificación contable para justificar la procedencia de los fondos utilizados en la compra.

Para completar ese cuadro indiciario, la propiedad ubicada en el condominio "Las Mercedes" de la localidad de Pilar, vendida mediante Escritura n° 138 del **1/8/2012** por Aurora P[REDACTED], -representada por Pedro B[REDACTED] en virtud del poder nulo otorgado el 4/4/2012-, a S[REDACTED] SA -representada por su Presidente Cristian P[REDACTED]-, fue utilizada por la firma al poco tiempo, más precisamente el **16/10/2012**, como parte de pago (a un valor





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

formal de \$350.000) para adquirir una fracción de campo ubicado en Estación Pujol, partido de Pergamino, a Zulema y Mabel B[REDACTED], y la parte indivisa perteneciente a Adolfo B[REDACTED] -llamativamente representado nuevamente por Pedro B[REDACTED] en virtud del Poder Especial Irrevocable de Venta otorgado el 5/9/12 ante el escribano Alfredo Patricio S[REDACTED], por la suma de \$5.000.000.-

Conforme fue acreditado en el sumario, en la Escritura pública n°206 del 16/10/2012 celebrada también ante el notario Alfredo S[REDACTED], se hizo constar que: el precio acordado de \$5.000.000.- fue abonado por la compradora (S[REDACTED] SA) con anterioridad al acto; que como antecedente de la operación habían celebrado un boleto de compraventa el 5/9/2012; y para justificar el origen del dinero se aportó un contrato de mutuo por el cual Cristian P[REDACTED] había prestado a la sociedad la suma de \$640.000.- en efectivo y \$1.160.000.- dividido en 13 cheques de pago diferido; y una certificación contable sobre los fondos utilizados en la que se incorporó un esquema de pagos incluyendo la venta del departamento de Pilar en \$350.000.-

Contrariamente a lo sostenido por S[REDACTED] en su descargo, se advierte que su comportamiento como notario no fue acorde a derecho, ya sea por haber introducido datos que no eran verdaderos y haber omitido cumplir con las formalidades que su cargo le imponía. Ello resultó evidenciado con el Acta que documentó el cumplimiento de la orden de secuestro librada en la IPP n° [REDACTED] cuando durante el procedimiento llevado a cabo en el Registro Público de contratos n° 8 de Pergamino al serle requerido a su titular Alfredo S[REDACTED], el boleto de compraventa celebrado entre Zulema Hayde y Mabel Graciela B[REDACTED], y S[REDACTED] SA, que refería a la venta de las Unidades funcionales n°230, 54 y Unidad complementaria S, sitas en Pilar, conforme copia de la certificación por él emitida, respondió que no obraba en su poder; como así tampoco el Acta de Directorio n°16 de S[REDACTED] SA donde se aprobó la compra del campo de propiedad de los B[REDACTED] agregada a la escritura de venta n°206 del 16/10/2012, pese a haber dejado constancia en la escritura respectiva que se agregaba copia certificada. (ver fs. 1111/1112 de la IPP n° [REDACTED])



Tal como fuera indicado por la Fiscal a cargo de la UFI n°6, Dra. Patricia Fernández en el requerimiento de elevación a juicio formulado, esa circunstancia se agrega a una larga lista de irregularidades en torno a la actuación del Escribano S■■■■, destacando que en la escritura de venta del departamento de Pilar se hizo constar que P■■■■ compareció en representación de S■■■■ SA, facultado para dicho acto por “Acta de Directorio número 24 de fecha 1 de agosto de 2012”, donde se autorizó la compra, que en copia certificada se agregaba al instrumento notarial, pero hizo notar que el número de Acta y fecha fueron completados de forma mecanográfica, lo que indicaba que se realizó con posterioridad, a lo que se sumó que el acta en cuestión carecía de firmas, se había consignado originariamente el día “8 de agosto de 2012”, para luego ser testado el 8 por el 1, lo cual indica que nuevamente el escribano dio cuenta de la existencia de documentos que nunca tuvo a la vista.

En efecto, cada una de las intervenciones del escribano en los sucesivos actos que fueron descriptos a lo largo de la instrucción, me permiten inferir que no se encontraba ajeno al plan delictual trazado, y teniendo presente que todos los involucrados eran personas de su conocimiento, su actuación permitió que Crisitan P■■■■, utilizando una empresa fantasma (S■■■■ SA), introdujera en el mercado los bienes adquiridos fraudulentamente para darle apariencia de licitud al origen de los fondos, lo que no habría podido llevarse a cabo sin su participación necesaria.

10°) Por último, en criterio de la suscripta no puede prosperar el planteo efectuado por la defensa de S■■■■ sobre el monto del embargo ordenado por el juez a quo sobre los bienes del procesado, entiendo que la suma de \$2.500.000.- se encuentra adecuadamente fundada y en consonancia con lo establecido por el art. 518 del C.P.P.N., teniendo en cuenta la naturaleza del delito que se le atribuyó a este imputado y las costas del presente proceso, por lo que corresponde descartar también ese agravio y confirmar en lo pertinente el decisorio recurrido.

En síntesis, todos los elementos descriptos incorporados a la presente causa y que fueron valorados por el juez a quo para fundar la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

resolución atacada, en mi criterio, autorizan a sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, la atribución delictiva que se le ha efectuado a Alfredo Patricio S[REDACTED], por lo que propongo confirmar la resolución impugnada. Así voto.

El Dr. Barbará dijo:

Adhiero al voto de la Dra. Vidal por cuanto comparto -en lo sustancial- sus fundamentos. Es mi voto.

Atento al resultado del Acuerdo que antecede,

SE RESUELVE:

I) Tener por desistido el recurso de apelación interpuesto por el Dr. M[REDACTED] por la defensa técnica de Cristian P[REDACTED], en razón de su incomparecencia a la audiencia designada. II) Confirmar la resolución del 25/11/2022, en cuanto procesó a Alfredo Patricio S[REDACTED] por encontrarlo responsable del delito de lavado de activos previsto en el art. 303 inc. 1) del C.P. en calidad de partícipe necesario. III) Revocar el procesamiento de Mirian Beatriz G[REDACTED] y en su lugar dictar la falta de mérito en relación al delito que le fuera imputado en los términos del art. 309 del CPPN. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada n° 15/13 de la C.S.J.N., y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen. La Dra. Andalaf Casiello no vota de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del art. 31 bis CPPN modificado por el art. 4° de la ley 27.384. (Expte. n° FRO 18224/2016/2/CA1).

